

JAVIER
FERNÁNDEZ

Portavoz de la Unión Sindical de Inspectores de Educación de Andalucía (USIE). Este representante sindical responde a las interrogantes sobre el inicio del curso y analiza las cuestiones clave sobre la vuelta a las aulas en plena pandemia del Covid

«¿Hacemos hospitales de campaña pero no escuelas de campaña?»

CHEMA RODRÍGUEZ SEVILLA

Pregunta.— Hoy reabren las escuelas infantiles, el 10 los colegios y el 15 los institutos y no cesan las críticas de padres y docentes. ¿Estamos realmente preparados para la vuelta al colegio?

Respuesta.— Eso va a depender de cada tipo de centro y la zona en la que esté ubicado. Situaciones excepcionales hubieran requerido medidas mucho más valientes que las que se van a tomar. Hoy martes, la inmensa mayoría de los docentes y las familias de Andalucía no conocen cómo será el inicio de curso. Eso no puede ser. Si la escuela funciona es gracias a que los docentes están al margen del politiquero.

P.— ¿Habría que retrasarla, como piden algunos sindicatos?

R.— Eso sería la constatación de un fracaso colectivo como sociedad. Además, ¿hasta cuándo? Una veintena de países de la OCDE ya han experimentado la vuelta a las aulas; ellos son un buen referente a tener en cuenta, y nos podrían dar ejemplos de cómo hacerlo bien.

P.— ¿Educación presencial, telemática o semipresencial?

R.— El derecho a la educación sólo puede desplegarse por completo con una educación presencial. La educación tiene una carga de socialización en sus propios fines. Aristóteles ya lo advirtió: somos un *zoon politikón*. Se hacen necesarios servicios mínimos de presencialidad en cada centro en función de 4 criterios prioritarios: vulnerabilidad económica de las familias, necesidad de conciliación en virtud de las características del trabajo de los progenitores, alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y atención al alumnado de menor edad: de 0 a 14 años.

P.— ¿Por qué tanto rechazo a la educación *online*? ¿Tan mal funcionó durante el confinamiento?

R.— Durante las primeras semanas del confinamiento casi un 30% de alumnos no tuvo prácticamente ningún tipo de actividad de aprendizaje ni conexión con sus docentes o tutores. Hemos constatado que se ha utilizado bastante la educación a distancia enviando tareas por correo electrónico en vez de la educación en línea, cara a cara o en directo. Lo primero no es educación. Lo segundo es sólo un sustitutivo temporal. La tecnología ha funcionado donde la familia ha funcionado. Lo cual confirma que la brecha no es digital, sino social. Un dato; el Estado gastó 302 millones de euros en el programa Escuela TIC 2.0 y no parece que la extraordinaria inversión desde el



GOGO LOBATO

«Retrasar el inicio del curso sería la constatación de un fracaso colectivo»

«Si la escuela funciona es porque los docentes están al margen del politiquero»

2009 al 2012 haya revertido en un mejor rendimiento académico.

P.— La Junta sostiene que lleva trabajando desde mayo para preparar el regreso a las aulas y sin embargo llueven las críticas de improvisación. ¿En qué quedamos?

R.— Se podrían haber aprovechado mejor esos meses para intentar,

aún a pesar de las dificultades y la gran excepcionalidad, buscar propuestas de mayor profundidad. Reconocemos que el asunto es muy difícil. Las soluciones deben ser sistémicas. El sistema educativo no está al margen de la sociedad. Aquí deben fajarse la Consejería de Educación, la de Salud, la de Asuntos Sociales, la de Trabajo (fijando los criterios que regulen la conciliación familiar y laboral) y los ayuntamientos. Educación por sí sola no puede, ni podrá nunca.

P.— Los directores de centros educativos han sido de los más combativos con la Administración. ¿Quizás porque se ha descargado sobre ellos una enorme responsabilidad?

R.— Los equipos directivos están haciendo un trabajo excepcional. Estarán a la altura en esta complicadísima coyuntura. Y los inspectores estaremos a su lado para ayudarles. La Administración no puede escudarse únicamente en la autonomía de los

centros porque ésta precisa, no de más, sino de mejor Administración que acompañe y promueva proyectos. La Consejería debe flexibilizar al máximo toda la normativa, desde la atribución docente a los horarios lectivos. Las instrucciones pedagógicas de 15 de junio de la Dirección General de Ordenación confunden más que guían, bloquean la autonomía de los centros. Han quedado desfasadas. No son útiles. Deberían revisarse para reducirlas a la mínima expresión. Además, el decálogo explicativo que se envió a los docentes debe tener rango normativo para garantizar la seguridad jurídica.

P.— ¿Por qué en otras comunidades, como Madrid, ha quedado todo el mundo más o menos satisfecho con el plan de retorno a las aulas y en Andalucía no? ¿Falta diálogo?

R.— Diálogo e interlocución creo que no, lo que ha faltado es mayor negociación; algo muy distinto. Es normal que se desconfie, son mu-

chos años de incumplimientos y doble lenguaje en Andalucía. Un ejemplo: el anterior gobierno andaluz se comprometió a que en septiembre de 2017 habría enfermeros escolares: todavía los estamos esperando.

P.— La bajada de la ratio ha sido, precisamente, una de las decisiones que ha adoptado la comunidad madrileña. ¿Tan importante es? ¿Por qué en Andalucía no se ha llevado a cabo?

R.— Las ratios tendrían que haberse reducido de oficio seleccionando aquellos centros más masificados. Pero el sentido común hace inviable la idea de responder solo con el aumento de docentes porque no existen espacios adecuados ni suficientes para ubicar al alumnado. Si, por ejemplo, Bachillerato y FP se impartieran en horario de tarde, se liberarían espacios para poder hacer desdobles. Es curioso, ¿somos capaces de hacer hospitales de campaña pero no escuelas de campaña? Se tendría que haber analizado cada centro y zona en función de los criterios que antes comenté y a raíz de eso, aportar los recursos humanos.

P.— Aquí se ha optado por dotar a los centros de mascarillas y gel y reforzar las plantillas con 6.000 profesores. ¿Es suficiente?

R.— Antes una reflexión. Los 2.000 millones de euros del Gobierno central son insuficientes. Italia, un país parecido al nuestro ha dedicado 3.000. Pero, además, no se nos ha explicado con transparencia cómo se repartirán. La Consejería ha puesto recursos materiales y humanos encima de la mesa, pero todos los recursos serán siempre insuficientes ante el problema educativo de mayor envergadura de los últimos 40 años. Repito, las soluciones

tienen que ser sistémicas.

P.— ¿Qué opinión le merece el protocolo diseñado por Salud para actuar en caso de sospechas de contagio de un alumno o profesor?

R.— Difícil de aplicar en el día a día de un centro porque no vale una talla única para todos. Tenemos en cada provincia un gabinete para la prevención de riesgos laborales y me sorprende el poco papel que está jugando.

P.— Algunas de las críticas se han centrado en la imposición de que un docente sea coordinador covid y no haya sanitarios en los centros. ¿Está de acuerdo con esas críticas?

R.— El coordinador covid será un docente del claustro que va a recibir una formación exprés y además *in extremis*. Ayudará al director porque le va a descargar de otras funciones, pero un personal sanitario para varios centros hubiera sido lo ideal ya que es el que ostenta la competencia para diagnosticar con fiabilidad.